

Una ola de estupor e indignación viene agitando al Mundo desde el jueves pasado, cuando la Junta Militar argentina hizo público su "documento" sobre los desaparecidos. Organizaciones internacionales, gobiernos —no todos, por supuesto— y al cierre de esta edición el Vaticano, han coincidido en marcar a fuego el cínico recurso con el que los militares argentinos pretenden poner punto final a siete años de terrorismo de Estado y genocidio.

Ni la propia Kirkpatrick, madrina indiscutida de la dictadura argentina, pudo evitar que el vocero del Departamento de Estado Alan Romberg reconociera que grupos de derechos humanos y otros en la Argentina, han encontrado el informe inadecuado. La tibieza con que los EE.UU. recibieron el documento, demuestra hasta dónde éste es indefendible aún para una administración Reagan ansiosa por zurcir los estragos de Malvinas.

En Israel, distintos sectores pidieron que el Parlamento examine las relaciones entre ambos países ya que entre los desaparecidos que se dan por definitivamente muertos, se cuentan numerosos judíos "cuya única culpa fue oponerse políticamente al poder". "El Estado judío —reclamó un diputado— tiene que revisar sus propias relaciones con la casta dictatorial que ocupa el poder en la Argentina".

En una declaración dada a publicidad a comienzos de la semana, el gobierno de España sostiene que el do-

El fantasma de Nüremberg

cumento de la Junta Militar es insuficiente y no responde al drama argentino, manifestando además "su profunda preocupación y rechazo ante la afirmación de que la casi totalidad de los desaparecidos eran terroristas, muy especialmente por lo que se refiere a aquellos de nacionalidad española y a los hijos y nietos de españoles por cuya suerte España se ha interesado, tras lo cual denuncia como "atentatorio a los más elementales derechos humanos el procedimiento empleado" por las FF.AA. argentinas.

Francia comunicó el martes al encargado de negocios de Argentina en París "su más viva sorpresa ante una declaración que pretende eximir de toda responsabilidad a los autores de los hechos cometidos en nombre del mantenimiento del orden público y que dejan entero el problema de los desaparecidos". Asimismo el gobierno de Mitterrand anunció su decisión de no abandonar la investigación sobre la suerte corrida por 15 franceses desaparecidos.

En tanto la Iglesia argentina parece dispuesta a soslayar el punto —quizá conciente de las divergencias internas— (el obispo de Río Negro calificó al documento de "falso e inmoral", los cardenales Primatesta y Aramburu se llamaron a silencio y el obispo de Avellaneda sostuvo que "és valiente y está

bien hecho"), el propio Juan Pablo II manifestó ante 60.000 fieles en Roma su preocupación por la declaración militar y su solidaridad con los familiares de los desaparecidos. Horas antes, L'Asservatore Romano editorializó que, a pesar del documento, "el tema de los desaparecidos continúa suscitando en todo el mundo amplio eco de sorpresa, que en muchos se convierte en abierta protesta". Para el órgano oficial del Vaticano, el expediente de los militares argentinos ha dejado sin voz y reconocido sin esperanza "la búsqueda angustiada de tantas familias, esposas y madres, por la suerte de sus seres queridos, entre los cuales no debe olvidarse, muchos niños inocentes".

Pero sin duda la reacción más resonante —por la dureza inusitada que la ubica al margen de la parsimonia diplomática— fue la del gobierno de Italia. Sin circunloquios, el presidente Sandro Pertini categrafió a la Junta Militar: "el aterrador cinismo del comunicado con que se anuncia la muerte de todos los ciudadanos argentinos y extranjeros desaparecidos en la Argentina en los trágicos años pasados bajo la dictadura militar coloca a los responsables fuera de la humanidad civil. Manifiesto el desdén y la protesta mía y del pueblo italiano en nombre de los elementales derechos humanos tan

cruelmente ofendidos y pisoteados". El gobierno argentino acusó a Italia de injerencia en sus asuntos internos y la respuesta fue una carta de Pertini al presidente Bignone, concebida en términos aún más duros: "¿Por qué usted, hombre honesto y oficial íntegro, quiere defender oficiales que por sus graves faltas deshonran el uniforme que usted lleva con honor?". Para el veterano presidente italiano: "La Argentina firmó la Carta de San Francisco (de las Naciones Unidas) y sus gobernantes deben responder ante el mundo entero por cualquier violación de los derechos humanos y civiles".

Este enfoque del problema, encarrando la represión de los militares argentinos como "crímenes contra la humanidad", parecía ir tomando cuerpo en Europa donde, además, se ha denunciado la desaparición no sólo de miles de argentinos sino también de ciudadanos italianos, holandeses, españoles, franceses, británicos y escandinavos. En ese sentido, no sería extraño que los países de la Comunidad Económica Europea emitan una declaración conjunta en las próximas horas. Como tampoco suena excesivo —al menos para los europeos— el pedido de la Asociación de Abogados Romanos (de magistratura democrática) para que se forme una comisión internacional investigadora y se organice un juicio —también internacional— similar al realizado en Nuremberg luego de la caída del régimen nacional-socialista.